

**MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRATO DE SERVICIOS TITULADO “OFICINA DE VIDA INDEPENDIENTE DE LA COMUNIDAD DE MADRID” COFINANCIADO AL 50% POR EL FONDO SOCIAL EUROPEO, DENTRO DEL PROGRAMA OPERATIVO DE LA COMUNIDAD DE MADRID, 2014-2020 (OBJETIVO TEMÁTICO 9, PRIORIDAD DE INVERSIÓN 9.3, OBJETIVO ESPECÍFICO 9.3.2).**

Los principios de vida independiente contemplan una participación activa de las personas con discapacidad en la sociedad, con los mismos derechos y capacidad para decidir que el resto de ciudadanos, pero también como personas que requieren de apoyos específicos que permitan el ejercicio de sus derechos.

En el ámbito internacional, la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad- promulgada por la Organización de las Naciones Unidas en 2006 y ratificada por España en 2007 y por la Asamblea de la Comunidad de Madrid en 2008- establece como uno de los principios, “el respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones, y la independencia de las personas”. La Convención supone la consagración del enfoque de derechos de las personas con discapacidad, de modo que considera a las personas con discapacidad como sujetos titulares de derechos y los poderes públicos están obligados a garantizar que el ejercicio de esos derechos sea pleno y efectivo.

En cumplimiento a lo establecido en la disposición final segunda de la Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, se aprobó el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social en el que figura como principio “la vida independiente” definida como “la situación en la que la persona con discapacidad ejerce el poder de decisión sobre su propia existencia y participa activamente en la vida de su comunidad, conforme al derecho al libre desarrollo de la personalidad”.

Desde junio de 2006 la Consejería de Políticas Sociales y Familia ha financiado un programa de apoyo a la vida independiente, que fue la primera iniciativa en nuestro país de gestión de asistencia personal, para que, a través de la asistencia personal, las personas con discapacidad contaran con un recurso complementario adecuado para alcanzar la máxima independencia posible, desarrollo personal y participación económica y social, a partir de su capacidad para gestionar su propia vida y su deseo de permanecer en su entorno. Esta iniciativa estaba en consonancia con la Ley 11/2003, de 27 de marzo, de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, que establecía como uno de sus objetivos que las personas puedan vivir dignamente a lo largo de su vida, para lo que es necesario prever los apoyos y ayudas que precisarán en cada momento.

La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, configura a la asistencia personal como una prestación económica (artículo 19) y que tiene como finalidad “la promoción de la autonomía de las personas con gran dependencia. Su objetivo es contribuir a la contratación de una asistencia personal, durante un número de horas, que facilite al beneficiario el acceso a la educación y al trabajo, así como una vida más autónoma en el ejercicio de las



La autenticidad de este documento se puede comprobar en [www.madrid.org/csv](http://www.madrid.org/csv) mediante el siguiente código seguro de verificación: **0907801325857324151918**

actividades básicas de la vida diaria”. En el mismo artículo se especifica que, previo acuerdo del Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, se establecerán las condiciones específicas de acceso a esta prestación y los montos que correspondan. La cuantía fijada en la actualidad para la prestación de asistente personal establece una horquilla entre 300 y 715 euros en función del grado de dependencia del solicitante, cuantías que, en el mejor de los casos, equivaldrían a una cobertura en torno a dos horas diarias de asistencia personal.

El número de horas de asistencia personal que requieren las personas con discapacidad está en función de sus circunstancias personales, laborales, de formación y, en definitiva, de su proyecto de vida personal. Las cantidades referidas se estiman en muchos casos insuficientes para contribuir a la autonomía a través del trabajo y la educación (vida activa), máxime si se ponen en relación con los costes mucho más elevados de otros servicios prestados para personas con discapacidad a los que también podrían tener acceso los demandantes de la prestación económica personal al cumplir con los requisitos que exige la Ley de Dependencia.

Además de reflejar la importancia que se da a los principios de vida independiente y autonomía personal en la normativa vigente en materia de discapacidad, cabe resaltar que el III Plan de Acción para Personas con Discapacidad (2012-2015) dedicó un programa del Área de Atención social, a la dependencia y promoción de la autonomía personal, al fomento de la vida independiente y la calidad de vida en línea con el espíritu de los anteriores planes aprobados. Igualmente se garantiza la continuidad de este servicio en la Estrategia Madrileña de Atención a Personas con Discapacidad (2018-2022), aprobada el 24 de julio de 2018 por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid.

A su vez, cabe resaltar que la Consejería valora muy positivamente la experiencia del programa de apoyo a la vida independiente en sus doce años de funcionamiento por las razones que se exponen a continuación:

- Facilita anualmente servicio de asistencia personal a aproximadamente 73 personas con discapacidad física y alto grado de autodeterminación, a las que han prestado apoyo una media de dos asistentes personales por participante, por lo que el programa también genera empleo.
- El programa es una contribución muy importante a la vida de los participantes, ya que posibilita el acceso a una vida lo más autónoma posible y a la toma de decisiones personales de forma libre e independiente en cada aspecto de su vida, especialmente aquellas decisiones sobre su propia vida personal, familiar y profesional y las que afectan a su desarrollo personal.
- Las personas que participan en el programa, además del servicio personalizado de asistencia personal, reciben servicios adicionales como orientación y asesoramiento en materia de empleo, accesibilidad y productos de apoyo, acceso a vivienda, etc., que también contribuyen a su participación social plena y efectiva.
- Se trata de un programa valorado muy positivamente por el Fondo Social Europeo y cofinanciado por éste al 50% por sus componentes de impulso de la vida activa de las personas con discapacidad y de apoyo para la formación y la integración sociolaboral.



- Las características del servicio de Asistencia Personal hacen que la estructura de costes tenga una imputación mínima en infraestructura y una dedicación maximizada en la prestación directa del servicio (más del 85% del presupuesto se dedica directamente a Asistentes Personales).
- Siendo un servicio dirigido a personas con vida activa, se valora que el importe del proyecto genera un retorno social por la contribución que se deriva del mantenimiento de los participantes como población activa (actual o futura en el caso de personas en formación) y, además, produce efectos beneficiosos en el mantenimiento de su salud.

La actividad de este Servicio, a través del actual contrato, ha recogido demanda de personas con discapacidad que cumplen con los requisitos de acceso.

Puesto que la Consejería de Políticas Sociales y Familia no dispone de medios personales para prestar el citado servicio y a fin de garantizar la continuidad en su prestación, por razones de interés público es preciso tramitar un contrato de servicios para su gestión en los términos establecidos en la vigente Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se trasponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

La duración del contrato se prevé por un periodo de dos años, prorrogables por periodos de, como máximo, veinticuatro meses, hasta un máximo de 5 años, y el importe del mismo asciende a **4.434.745,92 euros (IVA incluido del 10%)**, que se imputará a la posición presupuestaria 231F/26002 del Presupuesto de Gastos de la Consejería de Políticas Sociales y Familia.

Madrid, a fecha de firma

EL DIRECTOR GENERAL DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Jorge Jiménez de Cisneros Bailly-Baillière

